

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Recurso nº 330/2025

MMCC 096/2025

NOTIFICACIÓN

Le notifico que, con fecha 7 de agosto de 2025 el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha dictado el siguiente Acuerdo:

Resolución del 7 agosto de 2025, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la adopción de medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación denominado “Servicios de mantenimiento de equipos electromédicos de los centros Sanitarios de Atención Especializada Adscritos al Servicio Madrileño de Salud (5 lotes)” número de expediente: A/SER-001654/2025.

Con fecha 29 de julio de 2025 se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación de la sociedad mercantil SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID, S.L., formulando recurso especial en materia de contratación, contra los pliegos de la licitación de referencia que fueron publicados el día 14 de julio de 2025 en la Plataforma de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del plazo de presentación de ofertas (o, en su caso, de apertura de las mismas).

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

El 29 de julio de 2025 este Tribunal solicitó al Órgano de Contratación la remisión del correspondiente expediente y del preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que hasta la fecha se haya remitido, por lo que compete a este Tribunal decidir sobre la adopción de la medida cautelar, sin contar con el pronunciamiento del órgano de contratación.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

En este caso y como establece el apartado 4 del artículo 49 de la LCSP *“Salvo que se acuerde lo contrario por el órgano competente, la suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados”*.

Dado que el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo día 11 de agosto de 2025 y con el fin de evitar la continuación del procedimiento antes de que se resuelva el recurso interpuesto, este Tribunal considera conveniente adoptar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de licitación.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en

este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios irreparables a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

La adopción de la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación denominado “Servicios de mantenimiento de equipos electromédicos de los centros Sanitarios de Atención Especializada Adscritos al Servicio Madrileño de Salud (5 lotes)” número de expediente: A/SER-001654/2025, desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas y hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

P.O. El jefe de Servicio de Tramitación Procedimental

Firmado digitalmente por: PONS CARRERAS GABRIEL ANGEL
Fecha: 2025.08.08 12:11